

**COMPARECE – SOLICITA PARTICIPACION
FORMULA OPOSICION - MANIFIESTA
EN SUBSIDIO CONTESTA TRASLADO**

Señor Juez Federal:

Gastón Valtier, abogado inscripto en el T° 506 F° 70, en mi carácter de apoderado de “PORTA HNOS S.A.” en estos autos "**CRUZ, SILVIA MARCELA Y OTROS c/MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN s/AMPARO AMBIENTAL**” (Expte. N° 21076/2016), con el domicilio legal constituido en calle 9 de Julio N° 90, piso 2do de la ciudad de Córdoba y electrónico en 23-07679211-9, ante V.S. comparezco y digo:

I. PERSONERIA.

Tal como se acredita con poder general para pleitos que en copia debidamente juramentada se acompaña, soy apoderado de “PORTA HNOS S.A.”, con domicilio legal en Camino San Antonio Km. cuatro y medio de ésta Ciudad de Córdoba. En tal carácter comparezco, sin revocar la participación del Dr. Oscar Julián Valtier.

II. OBJETO.

2.1. Que en legal tiempo y forma, y dentro del plazo concedido por V.S. para contestar los traslados ordenados por la providencia de fecha 18.08.2017, vengo a formular una serie de manifestaciones a los efectos de fijar la posición de mi representada en este proceso.

2.2. A todo evento y en subsidio, y sin que implique consentir la desviación del proceso que V.S. ha dispuesto, vengo a contestar el traslado dispuesto.

2.3. Fundo lo expuesto en las consideraciones de hecho y derecho que serán expuestas a lo largo de esta presentación.

III. FORMULA OPOSICION - DENUNCIA VIOLACION DEL PROCESO - SE DEJEN SIN EFECTO MEDIDAS DE PRUEBA.

3.1. Que conforme la conducta anterior mantenida por esta parte desde que se transformó éste proceso y comenzó a violar todos y cada uno de los principios procesales establecidos por la Ley de Amparo N° 16.986 y el Código Procesal Civil y Comercial, venimos a ratificar y mantener nuestra oposición con toda aquella prueba que haya sido incorporada y/u ofrecida con posterioridad a la traba de la litis de este proceso.

Recordamos a V.S. que a la fecha de esta presentación existen pendientes de resolución dos Recursos Extraordinarios y una aclaratoria a resolución del Superior, por los mismos motivos en que se fundan la presente oposición.

3.2. No cabe duda que V.S. ha desnaturalizado el proceso que debió guiar este reclamo, transformando una acción de amparo cuyo objeto original fue constatar si mi representada cuenta con las habilitaciones pertinentes para desarrollar su actividad, a un juicio ordinario cuyo objeto es determinar si la actividad de mi mandante es o no contaminante, cuestión que tampoco es competente para tratar.

No solamente esa inequidad se ha cometido en este expediente.

Adicionalmente, se han transformado las audiencias de conciliación en “*públicas*” e “*informativas*”, se ha permitido -una vez cerrada la instancia con las contestaciones de la demanda- la incorporación de nuevos documentos y el ofrecimiento de nuevos medios de prueba, en una franca violación al art. 364 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, al principio de preclusión procesal y del debido proceso, poniendo a las demandadas en un total estado de indefensión.

3.3. Es claro y no admite duda en contra, que una vez trabada la Litis, la única prueba que producirse es la que ofrecieron las partes en la demanda y sus contestaciones, dado que éstas últimas fueron estructuradas en función del reclamo contenido en la demanda y la prueba ofrecida en la misma.

Al permitir que se autorice la incorporación de nuevos documentos y/o nuevos medios de prueba originalmente no ofrecidos, V.S. está violando la garantía de defensa en juicio, dado que de ese modo permite la incorporación de nuevos documentos y/o hechos que jamás pudieron tenerse en cuenta al contestar la demanda y que, además, pueden perjudicar todo el andamiaje jurídico

construido tenido hasta ese momento en miras, dado que el mismo fue pensado en función de la demanda.

Ello produce un gravísimo agravio a la parte demandada como consecuencia del cambio en las circunstancias que se tuvieron en miras al momento de planificar la defensa y el ofrecimiento de la prueba correspondiente, motivo por cual el Código Procesal lo prohíbe expresamente.

3.4. Esta “*mutación permanente del objeto*” que V.S. ha no sólo consentido, sino también alentado, deja a una de las partes –en el caso que nos ocupa, a las demandadas- en un total y absoluto estado de indefensión, desde que nunca pudieron defenderse de algo que jamás pudieron tener en miras.

Piénsese tan solo en el caso opuesto, esto es, si las demandadas, a medida que no les va gustando el resultado del proceso, fueran incorporando nueva documentación y/o realizando nuevos ofrecimientos de prueba con posterioridad a la traba de la Litis.

Tal situación importaría por cierto un serio dislate, y además, el proceso nunca podría cerrarse, habida cuenta estar las partes habilitadas a ofrecer nuevas pruebas y documentos “*sine die*”.

3.5. Es por tal motivo que esta parte expresa su **formal oposición** con la producción de la prueba ordenada mediante decreto de fecha 18.08.2017, **en tanto y en cuanto no sea la ofrecida por las partes en la demanda y/o en la contestaciones de demanda.**

3.6. Del mismo modo, se peticiona **se ordene el desglose** de los escritos que hayan acompañado documentación en forma extemporánea (esto es, con posterioridad a la traba de la Litis), junto con la documentación acompañada a los mismos y/o que hayan planteado hechos nuevos, ajenos a la demanda y/o a la contestación, por ser también y contener, manifestaciones claramente extemporáneas.

IV. EN SUBSIDIO CONTESTA TRASLADO.

4.1. Escrito de fs. 1283.

4.1.1. En su presentación de fs. 1283 la actora acompaña como documental “*las conclusiones periciales arribadas por el Ing. Marcos Tomasoni, perito de parte*” en la causa penal “Denuncia formulada por Cruz, Silvia Marcela y otros por contaminación ambiental –Ley 24.051”.

Como mi mandante mencionó al contestar la demanda de amparo en esta causa (Punto 4.3), en la referida causa penal se ordenó efectuar una **pericia médica ambiental interdisciplinaria** la cual concluyó la inexistencia de contaminación atribuible a Porta Hnos.

Concretamente, en la resolución de la Fiscalía de fecha 03.03.2015 que resuelve archivar la denuncia se señala:

*”... De este modo asumen decisiva importancia las razones proporcionadas por los **peritos oficiales** para fundar sus conclusiones. De las cuales se ha podido establecer que **ninguna relación causal existe entre la instalación de la Fabrica Porta y la presencia de las sustancias que conforme la Ley 24.051 se reputan prohibidas cuando exceden el límite asignado.**”*

*“En definitiva **ha quedado acreditado por medio de la pericia, la inexistencia de nexo causal, entre las afecciones y sintomatologías denunciadas por los querellantes y la actividad llevada a cabo en la planta de bioetanol de la empresa Porta Hermanos S.A....**”*

4.1.2. Esta decisión del Fiscal de Instrucción fue confirmada por el Sr. Fiscal de Cámara (14.01.2016), y por el Sr. Juez de Control (25.02.2016), por lo que la desestimación de la denuncia ha quedado firme (Expediente N° 1747698).

Toda esta documentación fue acompañada como prueba documental por mi mandante con la contestación de la demanda de amparo (Ver punto 7.1.9).

Por ello, resulta llamativo, que la propia parte actora acompañe a esta causa el informe efectuado por el perito de parte, el cual fue expresamente refutado por el informe aclaratorio de los peritos oficiales, lo que llevó a la desestimación y archivo de la citada denuncia penal.

4.1.3. En efecto, la propia parte actora acompaña como documental la “**Aclaratoria Pericia Oficial Porta Hnos**” practicada en la citada causa penal, en la cual, los peritos oficiales rebaten y descalifican las observaciones efectuadas por el Ing. Marcos Tomasoni.

Entre otros aspectos, los peritos oficiales señalan que "... *los valores de etanol presentados por el Ing. Tomasoni,... no son los informados por los peritos oficiales en la Tabla 3.3. del informe entregado, oportunamente a la fiscalía*"; y luego de refutar las demás observaciones del Ing. Tomasoni, la pericia aclaratoria concluye que "...*Las concentraciones de tolueno, hexano, xileno y compuestos clorados detectados no pueden relacionarse directamente con la planta ni con el proceso productivo de la misma*".

4.1.4. Por todo ello, y a fin de que V.S. pueda contar con la información completa de la referida causa penal, y no solo el informe presentado por el perito de una de las partes, en el presente se ofrecerá como prueba informativa, que se libre oficio a la fiscalía interviniente a fin de que remita a la presente causa "*ad effectum videndi e probandi*" la causa penal completa (Expte.Nº 1747698) que tramitó ante la Fiscalía de Instrucción 3º a cargo del Dr. José Alberto Mana.

De allí y a título de conclusión, el informe acompañado ha sido refutado por el perito oficial, y el mismo, ha sido desestimado por el propio juez que ordenó desestimar la denuncia.

4.1.5. Adicionalmente a ello, la actora, en su escrito de fs. 1283, señala "... *hemos incorporado recientemente un nuevo relevamiento efectuado por la cátedra de Ambiente y Saludo de la Facultad de Ciencias Médicas de la U.N.C.*"

Señalamos al respecto, que si bien, la parte actora no acompaña dicho informe, ni identifica a los firmantes del supuesto relevamiento, entendemos que se trata de un "trabajo" suscripto por los profesionales Medardo Avila Vázquez, Eduardo Maturano, Bryan Maclean y Flavia Difillipo.

Cabe entonces precisar, que, con relación al mismo, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, ha aclarado mediante nota de fecha 28 de abril de 2017 (que se adjunta como prueba documental), que la Universidad no ha tenido intervención directa en dicho trabajo; que no ha validado los métodos de investigación ni las conclusiones del mismo, que la Facultad de Ciencias Médicas de esa Universidad no ha participado de ese trabajo y que en consecuencia atribuir ese trabajo a esa Universidad Nacional es una afirmación errónea.

4.1.6. En conclusión, la documentación analizada, o bien ha sido objeto de refutación por parte de sus pares y/o del juez interviniente, o bien, ha sido desconocida por la autoridad máxima de la casa de estudios a la cual se la atribuye.

V.S. deberá tener presente ello.

4.2. Escrito de fs. 1260/1262.

4.2.1. La actora manifiesta que viene a ofrecer “*prueba nueva*”– aun cuando lo ofrecido se trata de pruebas que tuvo disponibles al momento de iniciar la presente demanda, y no fueron oportunamente ofrecidas.

Para fundar el pedido de incorporación de la misma cita y transcribe una referencia parcial que la Cámara Federal de Apelaciones ha efectuado en esta causa.

Concretamente cita **en forma parcial** el considerando 23) del pronunciamiento de la CSJN en los autos Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/ Y.P.F. S.A. y otros s/ daño ambiental, del 29 de agosto de 2006.

4.2.2. En efecto, en el fragmento citado la CSJN hace referencia al criterio amplio de interpretación de las reglas procesales en materia ambiental, pero ese mismo “*considerando*” **completo**, aclara que esos criterios, en ningún caso pueden aplicarse a costa de sacrificar el principio de congruencia y el derecho de defensa.

En este sentido **transcribimos completo** el considerando 23) de la causa Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/ Y.P.F. S.A. y otros s/ daño ambiental, del 29 de agosto de 2006, a saber:

“23) Que si bien no puede desconocerse que en asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio que, sin trascender el límite de su propia lógica, ponga el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin, que en esos casos se presenta una revalorización de las atribuciones del tribunal al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador, y que un

examen cerradamente literal de las normas rituales previstas para el clásico proceso adversarial de índole intersubjetivo sería frustratorio de los intereses superiores en juego, esos apropiados criterios hermenéuticos no pueden, por un lado, entronizarse en una fuente de naturaleza superior que autorice a privar al demandado de ejercer apropiadamente su garantía de defensa, y por su intermedio, el de tutelar derechos amparados por otras cláusulas constitucionales, tan merecedoras de protección como los invocados por la demandante. Y por el otro y con una trascendencia de pareja significación, que mediante el incumplimiento de reglas procesales que, como el principio de congruencia, están amalgamadas con el debido proceso, se impida al órgano judicial dictar un pronunciamiento fundado, expreso, positivo y preciso sobre todas y cada una de las cuestiones introducidas por la actora y de las defensas articuladas por el demandado, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo a las partes (arts. 34, inc. 4°, y 163, inc. 6°, del código de rito).

No es redundante puntualizar que la conclusión expresada encuentra un decisivo apoyo en el texto legal en vigencia que reglamenta los derechos comprometidos en el sub lite, pues frente a la sanción por parte del Congreso de la Nación de una disposición que autorizaba al magistrado a ex- tender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes (ley 25.675, art. 32 in fine), el Poder Ejecutivo de la Nación observó ese texto en particular sobre la base de considerar, cabe enfatizarlo, que desconocía el principio de congruencia procesal y que ese apartamiento, según la jurisprudencia de esta Corte, constituye un defecto que descalificaba al pronunciamiento con fundamento en la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias (decreto 2413/02, art.4).“

4.2.3. Como se advierte, este criterio de la CSJN, que ha sido ratificado además en pronunciamientos posteriores, es diametralmente opuesto al sentido que la Cámara y los actores pretender asignarle.

En efecto, ni el art. 32 de la Ley 25.675, ni la jurisprudencia de la CSJN facultan a los jueces –incluso en asuntos vinculados a la tutela colectiva del ambiente- a fallar más allá de lo sometido a su consideración por las partes; y que las amplias facultades que el art. 32 asigna a los jueces en ningún caso pueden desconocer el principio de congruencia procesal, ni afectar el derecho de defensa de las partes.

Por ello, es equivocada la afirmación de la actora, que con fundamento en la cita “*parcial*” mencionada afirma que “*queda harto acreditada la posibilidad no solo la posibilidad de incorporar prueba amplia al proceso sino la de que la misma sea valorada independientemente del objeto central del mismo*”.

Nada más alejado del texto del art. 32 (con su último párrafo vetado) de la Ley 25.675 y de la jurisprudencia de la CSJN.

4.2.4. Sin perjuicio de ello, y con relación a la prueba que la actora solicita incorporar, cabe señalar lo siguiente y solicitar las medidas que a continuación se transcriben:

a) Con relación al informe pericial oficial efectuado por el CETEQUI, y el informe del perito de parte Ing. Tomasoni, solicitamos a V.S. que ordene la remisión completa de la causa o copia certificada de la misma a fin de que V.S. pueda contar con la información completa de la referida causa penal, y no solo el informe presentado por el perito de una de las partes.

A tal fin corresponderá que se libre oficio a la fiscalía interviniente a fin de que remita a la presente causa “*ad efectum videndi e probandi*” la causa penal (Expte.N° 1747698) que tramitó ante la Fiscalía de Instrucción 3° a cargo del Dr. José Alberto Mana.

b) Con respecto al expediente municipal 30-15-001-093, se acompañan al presente las Resoluciones de fechas 27 de febrero de 2013 y 12 de junio de 2014 dictadas en el mismo.

4.3. Que, en función de lo expuesto en este acápite, solicito se tenga por contestado (con la reserva efectuada en el punto 1.1. del presente), el traslado conferido en subsidio.

V. PRUEBA.

Para el caso de desconocimiento de los extremos fácticos invocados en el capítulo precedente, reiteramos, sin que implique consentir esta improcedente desviación del proceso, venimos a ofrecer la prueba que hace al derecho de mi representada:

5.1. Documental: Se acompaña a la presente:

5.1.1. Nota de fecha 28 de abril de 2017 suscripta por el rector de la Universidad Nacional de Córdoba.

5.1.2. Resoluciones de fechas 27 de febrero de 2013 y 12 de junio de 2014 dictadas en el expediente municipal 30-15-001-093.

5.2. Informativa: Peticionamos se libren los siguientes oficios:

5.2.1. A la Fiscalía de Instrucción 3° a cargo del Dr. José Alberto Mana a fin de que remita a la presente causa “*ad efectum videndi e probandi*” la causa penal **“Denuncia formulada por Cruz, Silvia Marcela y otros por contaminación ambiental –Ley 24.051” (Expte.N° 1747698)**. En su defecto, deberá remitir copia certificada de la misma.

5.2.2. A la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, para que en caso de desconocimiento, acompañe copia certificada de las Resoluciones de fechas 27 de febrero de 2013 y 12 de junio de 2014 dictadas en el mismo, en el expediente municipal 30-15-001-093.

VI. PETITUM

Por lo expuesto, a V.S. solicitamos:

6.1. Se tenga presente que se mantiene la oposición con la forma en que el proceso ha sido desnaturalizado.

6.2. Se tenga presente la oposición formulada en el presente, con relación a la producción de la prueba ordenada mediante decreto de fecha 18.08.2017, **en tanto y en cuanto no sea la ofrecida por las partes en la demanda y/o en la contestaciones de demanda**.

6.3. Se ordene el desglose de los escritos que hayan acompañado documentación en forma extemporánea (esto es, con posterioridad a la traba de la Litis), junto con la documentación acompañada a los mismos y/o que hayan

planteado hechos nuevos, ajenos a la demanda y/o a la contestación, por ser también y contener, manifestaciones claramente extemporáneas.

6.4. Se tenga por contestado, en subsidio ya todo evento, el traslado conferido por el Decreto de fecha 18.08.2017.

Proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA